

secuente con lo prevenido en el artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, remítase la presente causa á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Magistrado de Circuito, lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Aurelio Rámia Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Es copia que certifico. Querétaro, Mayo 29 de 1874.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general interino dice: que el 16 de Marzo del presente, fué aprehendido en Ario de Rosales. Albino Lopez, por circulador de moneda falsa (caterce reales en tlacos) y el Juez de Distrito de Morelia, en 20 de Abril le dió por compurgado con el tiempo sufrido de prision. Revisada la causa por el Tribunal de Circuito respectivo, este confirmó la sentencia del inferior por sus propios legales fundamentos. El que suscribe, considerando arregladas á derecho las determinaciones referidas, y no encontrando mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en la causa, pide á la Sala se sirva declararlo así, dando por revisado el proceso.

México, Junio 10 de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 12 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landá*, secretario.

Es copia. México, Junio 22 de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por D. Domingo Navarrete, en representacion de la casa Alzuyeta Hermanos y C^{as} de Ario, contra el cobro del derecho del 6 por ciento, por introduccion de mil trescientas quince piezas de manta, procedentes de la fábrica de Salvatierra, del Estado de Guanajuato.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

D. Domingo Navarrete, del comercio de Ario, y legítimo representante de la casa Alzuyeta Hermanos y C^{as}, se presentó en 8 del que fina al Juzgado de 1^a instancia de aquel Distrito, manifestando: que con fecha 11 de Febrero anterior, se le había otorgado amparo de garantías por la justicia federal, á consecuencia de la queja elevada contra el Administrador de rentas de Ario, que le cobraba el 6 por ciento con que se gravaron las mantas procedentes de otros Estados, hallándose libres de todo derecho las fabricadas en Michoacan, por lo que se infringía notoriamente la ley general de 1^o de Mayo de 1868, referente á la fraccion 9^a del art. 72 constitucional. Que para cludirse hoy la consecuencia de esta sentencia, se expidieron por la Legislatura del Estado los decretos núms. 17 y 18 de 16 del mismo Febrero, declarándose por el primero, libre de todo derecho el algodón que se consuma en el Estado, cualesquiera que sea su procedencia; y decretándose por el segundo una subvencion de \$ 5,000 para las fábricas de la Union y de la Paz establecidas en esta Capital, gravándose á la vez con un 6 por ciento por el primer decreto, toda clase de manufacturas de algodón. Que como se ve desde luego, las mantas del Estado pagan el 6 por ciento con la subvencion decretada, y queda por lo mismo, bien clara la notoria infraccion del ar-

tículo constitucional y de la ley general citada, y por lo mismo pedia amparo de garantías, con fundamento de la fracción 3ª del art. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Como en este escrito se pidió a la vez la suspensión inmediata del acto reclamado, la decretó de conformidad el Juez de primera instancia, en los términos del art. 5º de la ley últimamente citada.

En 11 de Abril expone la parte quejosa, que por el Administrador de rentas de Ario se le cobra el 6 por ciento sobre precios de aforo, á 1,315 piezas de mantas que introdujo procedentes de la fábrica de Salvatierra con las guías que expresa, y reproduce en seguida las razones que en su concepto fundan el juicio que intenta.

La autoridad informante, cumpliendo con la primera parte del artículo 9º de la ley orgánica reglamentaria de estos juicios, procura demostrar que los decretos de la Legislatura del Estado números 17 y 18, no se oponen en manera alguna al texto constitucional citado; ni á la ley de 1º de Mayo de 1868. Entra en el exámen de cada uno de los decretos, y respecto del primero, sostiene, con presencia de su lectura, que el gravámen que impone á las manufacturas de algodón que se fabrican y consumen en el Estado, es el mismo que causaron las procedentes de otros; de manera que este decreto no se halla en oposicion con el general de 1º de Mayo de que se ha hablado, y de consiguiente ni con la fracción 9ª del art. 72 de la Constitucion general.

El segundo decreto núm. 18, tambien lo encuentra arreglado á estos preceptos, por que no estando prohibido á los Estados conceder subvenciones á favor de la industria que se desarrolle en su propio suelo, lejos de obrarse contra algun precepto constitucional y sus leyes, juzga que el art. 117 de la carta fundamental, viene apoyando el decreto de que se habla. Añade luego, que por ciertas dificultades no ha podido entregarse la subvencion, la que tal vez no ten-

drá efecto en último resultado; y concluye procurando demostrar, que aun cuando se destinara la subvencion al pago de la alcabala, no traería esto consigo la restriccion onerosa que está prohibida en el comercio de Estado á Estado, por lo que cree no debe decretarse el amparo.

A este informe se acompaña el número 284 del Periódico oficial del Estado, que publicó los dos decretos de que se ha hablado; un certificado de la Tesorería general, por el cual aparece que aun no se ha señalado la subvencion; y otro del Administrador de rentas de esta Capital, que habla de los pagos hechos por la fábrica de la Paz, con motivo del impuesto decretado, y de los que adeuda la Union por la misma causa.

Se registra por último un certificado de la Administracion de rentas de Ario que presentó Navarrete, y en el cual se hace mérito de las introducciones de mantas, hechas á aquella plaza, libre de todo derecho.

En este estado pasa el expediente al que suscribe para pedir sobre lo principal, segun lo prevenido en la 2ª parte del art. 9º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Cumpliendo pues con este precepto, y consignados ya los principales antecedentes que han dado origen á este juicio, se comprende desde luego, que estos bastan para resolver la cuestion, la que siendo únicamente de derecho constitucional, son suficientes para llegar á la final solucion, el exámen de sus principios y la aplicacion de los decretos de la Legislatura del Estado.

Así pues, la cuestion única que hay que examinar, es si los decretos núms. 17 y 18 de que se ha hablado, implican en su esencia y su ejecucion las restricciones onerosas de que habla la fracción 9ª del art. 72 de la Constitucion general, y si se ha infringido por lo mismo el Supremo decreto de 1º de Mayo de 1868, invadiéndose de este modo la esfera de la autoridad federal.

Antes de entrar al fondo de la cuestion, conviene tener presente lo que ya otras veces se ha dicho por este Ministerio fiscal, ci-

tando á propósito al Sr. Castillo Velasco, quien en su obra de derecho constitucional mexicano, se expresa en los términos siguientes: "La facultad de impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones onerosas, es no solo justa sino necesaria para conservar la buena armonía entre los Estados que forman la federación Mexicana. Las restricciones onerosas á que se refiere la fracción 9ª del art. 72 de la constitución, son aquellas que por el gravámen que produzcan, puedan afectar, perjudicándola, á la producción y al comercio de otro Estado. Es evidente que si la federación se convirtiera en perjuicio para alguno ó algunos Estados, ellos tendrían el derecho de reclamar y hasta de separarse de una asociación perjudicial. Para cortar este mal, así como las reclamaciones que habría necesidad de resolver y que pudieran afectar hasta la Soberanía de los mismos Estados, la justicia y la conveniencia política exigieron que se facultara al Congreso para impedir esas restricciones onerosas; pero esto se ha de verificar por medio de bases generales y no de otra manera particular, por que habría sido constituir al Congreso en poder judicial, peligro que la constitución ha querido evitar cuidadosamente."

Estos principios que esclarecen perfectamente la inteligencia de la fracción 9ª del artículo constitucional á que se refieren, sirven de base al decreto general de 1º de Mayo de 1868, de manera que se cuenta ya con los datos suficientes para su exacta aplicación.

Supuesto lo que antecede, fácil es demostrar que, si bien el decreto número 17 de la Legislatura del Estado está en consonancia con los principios constitucionales, porque el gravámen que impone á las mantas del Estado es el mismo que exige á las que se importen de otros, no puede sostenerse lo mismo del 2º decreto de igual fecha número 18, supuesto que la subvención

acordada implica á todas luces una restricción onerosa, prohibida por la constitución y la ley respectiva.

Para esclarecer esto hasta la evidencia, pueden considerarse los tres casos que siguen: 6 la subvención, por el tiempo en que debe disfrutarse conforme al mismo decreto, es mayor que el importe de la alcabala que causen las mantas del Estado, elaboradas en el mismo tiempo, ó es igual ó es menor.

En el primer caso, hay un excedente á favor de la industria del Estado que constituiría propiamente la subvención, sin que por esto dejara de creerse que en realidad y para los efectos legales no se había pagado el impuesto de alcabala, supuesta la compensación de lo causado, con la parte equivalente de la cedida por el decreto. Como se vé, no hay en este caso la igualdad de derechos que quiere la ley, y de consiguiente se funda una restricción onerosa.

En el segundo, esto es, cuando la parte de subvención es igual al monto del 6 por ciento, se palpa también la desigualdad de derechos, toda vez que las mantas del Estado no habrían pagado en realidad ningunos, mientras que las de otros Estados se encontrarían con el gravámen del decreto número 17. Este caso se halla en iguales condiciones que el anterior, y como tiene los mismos rasgos de claridad, no hay para que entrar en mas esplicaciones.

En cuanto al tercero, que supone ser menor la subvención que los derechos causados, militan las mismas razones aunque en sentido inverso al primer caso, por que en el de que se habla, la parte del impuesto excedente cedía á beneficio del Estado, habiéndose antes compensado la otra parte, con la de la subvención acordada hasta el monto necesario. De aquí resulta, que las mantas de Michoacan, vendrían, aun en el punto de que tratamos, á pagar mucho menos cantidad que las importadas de otros Estados, siendo á su vez bien notoria la restricción onerosa que envuelve juntamente este tercer caso.

Examinado el decreto número 18 de la Legislatura del Estado, á la luz del artículo constitucional y de la ley de 19 de Mayo de 1868, se demuestra perfectamente bien, por su aplicacion á cada uno de los casos que pueden ocurrir, que se halla en pugna abierta con los mismos principios y supremas disposiciones citadas, y que es indefectible que á su vez ha invadido la esfera de la autoridad federal.

El Administrador que informa, para justificar la aplicacion de sus actos en el cobro que motiva el amparo, sostiene, defendiendo los decretos del Estado, que el número 17 al imponer la igualdad de derechos á todas las mantas, le dió un efecto permanente á la disposicion, mientras que el número 18 solo concedió una gracia por tiempo limitado; y de aquí pretende deducir la constitucionalidad del segundo. Pero como se palpa, esta razon no es suficiente al objeto propuesto, por que la constitucionalidad tan solo debe buscarse en los principios, de manera que no por que los efectos del decreto sean limitados á cierto tiempo, dejará de haber inconstitucionalidad en su esencia y en su aplicacion.

Tratándose del caso en cuestion, y suponiendo que sea por tiempo limitado la gracia que se otorga á las fábricas de mantas del Estado, la Paz y la Union, no por esto dejaría de existir, durante el mismo tiempo, esa restriccion onerosa que ha prohibido la constitucion en el comercio de Estado á Estado, supuesto que la subvencion acordada venía á establecer la desigualdad de derechos en los tres casos posibles de que antes se ha hablado. El Supremo decreto de 19 de Mayo de 1868, es terminante sobre el particular.

Se dice tambien que el Gobierno hará de esta gracia una equitativa aplicacion á cada una de las fábricas, segun las necesidades y demas circunstancias que demanden su fomento; pero esta consideracion vista con todo el peso de su justicia, tampoco es argumento que culpe el proceder del Admi-

nistrador, ni funde la constitucionalidad del decreto número 18. Téngase presente, que la carta fundamental de 57, está basada en ciertos principios que constituyen el pacto federal, y que cualesquiera que sean las constituciones ó leyes de los Estados, deben posponerse á la general y á las leyes del Congreso de la Union (arts. 109 y 126 de la misma constitucion.)

Resulta de aquí, que en la cuestion de principios que se viene examinando, tan solo deben considerarse estos por una parte, y las disposiciones locales por otra; pero de ninguna manera se debe juzgar sobre lo principal, por hechos posteriores que constituyen una parte secundaria, como es la reglamentacion.

Pero aun en este supuesto, y bajo la mas equitativa de las aplicaciones que se hiciera de la gracia dicha, siempre se viene en último resultado á la desigualdad de derechos que dá origen á las restricciones onerosas, de manera que esta otra razon carece de toda la fuerza conque se lo quiere revestir.

Por el certificado de la Tesorería general, aparece, que no se ha cubierto aun la subvencion; y por el del Administrador de rentas, lo que se ha causado y pagado por las dos fábricas únicas que hay en el Estado; pero los hechos que se desprenden justificados de estos documentos, tampoco confirman la constitucionalidad del decreto número 18, por que si este establece una concesion que funda derechos y obligaciones que no han podido llevarse al terreno práctico, por motivos á cuyo examen no es del caso entrar, la falta de aplicacion de dicho decreto determinada por un accidente, no puede cambiar ni modificar la esencia del mismo, hasta el grado de que deje de ser en sí lo que el Legislador se propuso. Este dió un decreto, que como se ha visto, se halla en pugna con la constitucion y la ley general relativa de 19 de Mayo de 1868; luego bastan solo los principios, para juzgarlo en la aplicacion que de él se haga.

Pero todavia mas, el ejercicio de estos

derechos y obligaciones, darían el resultado cierto y positivo de que los dueños de las fábricas se reembolsarán, con la cantidad subvencionada, de todo ó parte del impuesto creado por el decreto número 17. He aquí pues, como aquellos documentos son á la vez improcedentes en la cuestión de derecho constitucional.

La consecuencia que pretende sacarse de la donación que se hiciera por un Estado, de alguna de sus fincas para el establecimiento de una fábrica industrial, partiendo de la inteligencia dada por Navarrete al decreto número 18 para el efecto de las restricciones onerosas, no está basada en los mejores principios de la lógica, por que siendo los casos enteramente distintos, parten á su vez de principios distintos.

En la cuestión de mantas, con referencia al artículo constitucional y á su ley relativa, se consideran las relaciones comerciales de Estado á Estado, mientras que en el supuesto de la parte informante, tan solo se trata de los derechos de un Estado en las relaciones inmediatas con sus propios intereses.

Iguales observaciones se harían al tratarse de la necesidad, que supone el Administrador, de reformar las leyes hacendarias siempre que se tuviera en cuenta la inteligencia de que antes se ha hablado. Siendo por lo mismo claro este punto, no hay para que entrar en mas pormenores.

El último certificado que acompaña al quejoso, confirma la libre introducción de las mantas al Distrito de Ario, procedentes de esta Capital.

Antes de concluir, y por lo que pueda afectar á la soberanía del Estado que reconoce el que suscribe, en los términos constitucionales, hay que tenerse presente que en la discusión relativa de la fracción 9ª del art. 72 citado, se hizo mérito de aquella en los discursos de los oradores constituyentes para el efecto de sostenerla; y que despues de un exámen detenido, así como de demostrarse que no se trataba de con-

tralizar la Legislación en materia de comercio interior, por que de aquí nacían las resistencias de los Estados, *casi siempre legítimas*, puesto que defendían su soberanía, se aprobó la fracción de este artículo en el sentido de que la facultad del centro se limitaba tan solo á impedir las *restricciones onerosas*, dejando en lo demas libre y expedita la soberanía de las localidades.

Tal es el sentido constitucional con el que se halla de acuerdo la ley de 19 de Mayo de 1868. (Historia del Congreso constituyente por D. Francisco Zarco, en el tomo 2º página 410 á 414.)

En atención á todo lo expuesto, y con fundamento de las leyes y doctrinas citadas, el Promotor pide, apoyado ademas en la 2ª parte del art. 2º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se resuelva, que: la Justicia de la Union ampara y protege á la parte quejosa representada por D. Domingo Navarrete, contra los actos del Administrador de rentas de Ario, que lo exige el impuesto del 6 por ciento sobre precio de Tarifa, á las mantas introducidas al mismo Distrito.

Morelia, Abril 30 de 1874.—N. Caballero.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 29 de 1874.—Isidro Aleman.

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

Examinada la cuestión que envuelve el presente juicio de amparo, á la luz de los principios constitucionales, el Promotor cree que las razones aducidas en su pedimento de 30 del próximo pasado, son bastantes para resolver aquella en el sentido que indica. No juzga pues necesario entrar al estudio de las pruebas que promovió la parte quejosa, siendo que aun sin contar con ellas, la cuestión puede resolverse en justicia, lo que basta para llenar debidamente

los deberes del Ministerio fiscal, quien reproduciendo su ya citado escrito, pide se decreta de conformidad.

Morelia, Mayo 26 de 1874.—*N. Cabañero*: Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 29 de 1874.—*Isidro Alman*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Mayo 27 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por D. Domingo Navarrete, representante de la casa Alzuyeta Hermanos y C^a establecida en Ario, contra el C. Administrador de Rentas de dicha Villa, por el cobro que le hace del seis por ciento sobre el precio de tarifa por mil trescientas quince piezas de manta, procedentes de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato; y cuyos derechos fueron impuestos á las mantas elaboradas en el Estado, y á las introducidas de otros por la ley número 17 expedida por la Legislatura en 16 de Febrero de este año; creyendo con este procedimiento el quejoso, violadas en su persona las garantías que el Código fundamental de la República, otorga al comercio interior, y al hombre los artículos 28 y fracción 9^a del 72, y Considerando:

Primero: que el repetido decreto de la Legislatura del Estado número 17 de 16 de Febrero, que impuso á las mantas de Michoacan y á las de los otros Estados el seis por ciento; y el número 18 de la misma fecha que otorga á las fábricas de la Paz y de la Union, establecidas en esta Ciudad, una subvencion de cinco mil pesos, pagadera en los meses que faltan del año fiscal; cuyas disposiciones se registran en el Periódico oficial á fojas 12 vuelta; aunque en su forma aparecen distintas y sin relacion alguna, esencialmente son un solo acto legislativo, indiviso y continuo, como lo demuestran las circunstancias de haber sido dictadas en un solo día, en una misma hora, en

una misma sesion y por el mismo motivo; cuyas circunstancias están plenamente probadas en el documento de fojas 54, que es una copia certificada del acta de la sesion en que fueron iniciadas, discutidas y aprobadas las proposiciones que se contienen en los dos decretos referidos, y en la que se vé, que habiendo dado cuenta la primera comision de hacienda con el dictamen que extendió á consecuencia de la solicitud presentada por los Sres. Lavis y Alva, solicitando una subvencion para las fábricas dichas, la expresada comision concluyó aquel, presentando un proyecto de ley compuesto de cuatro artículos, de los cuales, el segundo concedia la subvencion de cinco mil pesos, el tercero autorizaba al Ejecutivo para distribuirlos entre las fábricas subvencionadas y el cuarto imponía á las manufacturas de algodón de estas y á las de otros Estados, el derecho de un seis por ciento sobre precio de tarifa. Discutida y aprobada esta ley, no apareció dividida en dos, sino cuando la comision de policía presentó las minutas respectivas para su aprobacion; de modo, que el contenido de los decretos números 17 y 18 fué uno mismo, presentado en dos minutas diferentes.

Segundo: que por lo mismo y en el último análisis, las leyes citadas tienen á decir lo siguiente: "las mantas de Michoacan y las de los otros Estados que se introduzcan y consuman en aquel, pagarán el seis por ciento sobre el precio de tarifa; las mantas de Michoacan pagarán el mismo derecho, que se les devolverá por vía de subvencion;" envolviendo, como se vé, estos conceptos ideas contrarias, puesto que la primera establece para las mantas de Michoacan un impuesto que destruye la segunda. Y esto no es una mera suposicion, pues basta ver el informe del Ejecutivo de fojas 37, para persuadirse de que la mente de este, así como la de la Legislatura al establecer el impuesto y otorgar la subvencion, fué, como terminantemente lo expresa el primero, (cuando dice que esto se hizo *para solo el*

objeto de conciliar los intereses de las fábricas con los fiscales del Estado), nivelar la subvencion con el impuesto.

Tercero: que la consecuencia necesaria de las dos leyes citadas, es que mientras las mantas de los otros Estados que se introducen en el de Michoacan, pagan el impuesto señalado en la número 17, las que se elaboran y consumen en las fábricas de la Union y de la Paz, nada pagan, por que la subvencion otorgada por la número 18, no es mas que la devolución de los derechos exigidos por aquella; lo que evidentemente contiene una infraccion palpable de la ley general de 1º de Mayo de 1868 reglamentaria de la fraccion 9ª del artículo 72 de la Carta fundamental de la Nacion.

Cuarto: que siendo esta, segun su artículo 126, la ley suprema de toda la Union, á la que deben arreglarse los fallos judiciales á pesar de las disposiciones que en contrario contengan las constituciones ó leyes de los Estados; y estableciendo los decretos citados números 17 y 18, tanto una restriccion onerosa para el comercio de Estado á Estado, como una prohibicion para que circulen libremente en el de Michoacan las mantas procedentes de otros, á pretesto de fomentar la industria fábril del primero, es igualmente claro que las disposiciones contenidas en una y otra ley son contrarias á los artículos 28 y 27, fraccion 9ª de la Constitucion general de 1857.

Quinto: que ademas de quedar demostrado que las mantas introducidas á Michoacan y consumidas en él, procedentes de otros Estados, pagan derechos que no se cobran á las de la Paz y de la Union, ó que si se les cobran se les devuelven en forma de subvencion; de las constancias de autos y de las pruebas rendidas por el quejoso, aparece justificado; 1º: que la Administracion de Rentas de esta Ciudad no había cobrado ningunos derechos á las mantas de la Paz y de la Union, sino hasta el 10 de Abril, siendo que las mantas que los causaron fueron elaboradas en ambas fábricas, del 24 de

Febrero al 27 de Marzo último (fojas 33). 2º: que este cobro se hizo á consecuencia del presente juicio, promovido por el Sr. Navarrete el 8 de Abril (fojas 39 vuelta). 3º: que el pago lo han hecho las fábricas referidas en papel, en forma de vales, por cantidades á cuenta de la subvencion (fojas 40 frente y vuelta). 4º: que la Tesoreria del Estado ha entregado ya á las fábricas de la Paz y de la Union, algunas cantidades á buena cuenta de la subvencion (fojas 35). 5º: que las mantas que de los otros Estados se introducen al de Michoacan, no pueden competir en precio con las de este, por la mayor alcabala que pagan (fojas 41). 6º y último: que aunque las tantas veces repetidas fábricas han pagado en numerario el veinticinco por ciento adicional, este pago es ilusorio, por quedar compensado con los derechos que deja de pagar el algodón con que se elaboran sus artefactos, en virtud del artículo 1º de la ley número 17.

Sexto: que como consecuencia natural de todo lo expuesto, las disposiciones contenidas en las leyes de 16 de Febrero de este año, expedidas por la Legislatura del Estado, contienen infracciones flagrantes de la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion general y del 28 de la misma; invadiendo las dos, la esfera del Poder federal y violando ambas una de las garantías individuales.

Por lo que y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion general citada y de la ley de 20 de Enero de 1869, como pide el C. Promotor, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Domingo Navarrete, contra el acto del C. Administrador de Rentas de Ario, por el que le cobra el seis por ciento sobre el precio de tarifa, por las mil trescientas quince piezas de manta que introdujo, procedentes del Estado de Guanajuato.

Hágase saber este fallo, publíquese en la forma legal, y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia.

Lo decretó en definitiva el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan.—Doy

fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia Mayo 29 de 1874.—*Isidro Aleman*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 15 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por D. Domingo Navarrete, en representacion de la casa Alzuyeta Hermanos y C^{as}, de Ario, contra el cobro del derecho del seis por ciento por introduccion de mil trescientas quince piezas de manta procedentes de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato, á la misma Villa de Ario del Estado de Michoacan, cuyo cobro hace esa Administracion de rentas en virtud de la prevencion que le impone la ley número 17, expedida por la Legislatura en 16 de Febrero del presente año, con cuyo acto alega el quejoso que se violan on las personas de sus representados, las garantías que la Constitucion general de la República, otorga en su artículo 28, en virtud de que la ley número 18 que en la misma fecha y en la misma sesion expidió la Legislatura del propio Estado, subvencionó á las fábricas de la Paz y de la Union, establecidas en la Ciudad de Morelia, con la cantidad hasta de cinco mil pesos distribuida á juicio del Ejecutivo, con los datos que el mismo adquiriera por sí, ó le ministraren los interesados; con cuyas dos leyes combinadas, percibe el quejoso que se imponen restricciones onerosas á los productos de otros Estados, en virtud de que la primera de las citadas leyes nivela los derechos que causan las mantas de los demás Estados con los que causan las elaboradas en el Estado de Michoacan; y que la segunda que concede á las mencionadas fábricas la subvencion marcada, las hace de mejor condicion en el precio. Visto el informe de la Administracion de rentas de Ario, y el

TOMO VI.—PARTE II.

que tambien produjo el Gobierno del Estado, exponiendo las razones por que no juzgan procedente el amparo; la prueba rendida por el promovente; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que la Legislatura del Estado de Michoacan lejos de imponer restricciones onerosas contrariando las prevenciones del artículo 28 constitucional y de la ley general de 1^o de Mayo de 1868, estableció la igualdad mas perfecta en el cobro de derechos á todas las mantas tanto del Estado como de los otros.

Que la misma Legislatura ha estado en el pleno uso de sus derechos para expedir la ley número 18, por la que subvencionando las fábricas establecidas en el Estado, les imparta una proteccion directa, y las mejore en su condicion bajo las bases que considere mas oportunas, sin atacar derecho alguno.

Que lejos de considerarse que la Legislatura haya usado mal de su derecho, ha puesto en práctica una obligacion de todo gobierno de impartir su proteccion á las industrias de los pueblos, sin que pueda alegarse como fundamento, que con la combinacion de estas dos leyes que en la mente del quejoso invaden las atribuciones del Congreso de la Union, por que esto en verdad no es deducible.

Que la prueba que rindió el mismo quejoso para poner en claro que las dos leyes se discutieron en una misma sesion, y se expidieron en un solo acto, de donde deduce de una manera violenta, que en la mente del Legislador estuvo perjudicar los productos de los otros Estados mejorando los del suyo, no es tampoco un medio de probar la violacion que reclama.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 constitucionales, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta, 1^o: Que es de revocarse y se revoca la sentencia que pronunció el Juzgado de Distrito de Michoacan, en 27 de

Mayo próximo pasado, amparando al quejoso. 2º: Se declara que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Domingo Navarrete, contra el acto del C. Administrador de rentas de Ario, por el cobro que le hace del seis por ciento sobre precio de tarifa por las mil trescientas piezas de manta, que procedentes de Salvatierra del Estado de Guanajuato, introdujo al de Michoacan.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 25 de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla por el C. Ricardo García, contra los procedimientos del Tribunal de 1ª instancia del Distrito de Tepeji, que lo condenó á tres meses de servicio de cárcel y al pago de cincuenta pesos de multa, por considerarlo como tinterillo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Ricardo García, contra el Tribunal de 1ª instancia de Tepeji, por haberlo condenado á sufrir la pena de tres meses de prision en la cárcel pú-

blica y al pago de una multa de \$ 50, ante V. dice: que en el testimonio que la autoridad responsable remitió, relativo á la causa instruida al quejoso, por haber sido acusado de agente intruso, hay constancias de que en efecto, sin haber sido oído, fué condenado á sufrir la pena de que se ha hecho mencion. Tal hecho, aunque apoyado en una ley, es atentatorio y viola en perjuicio del promovente las garantías que á todo acusado otorga el artículo 20 de la Constitucion general, pues este previene entre otras cosas: "que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos, segun su voluntad;" y en el caso, ni se hizo saber al C. García el nombre de su acusador, ni se le tomó declaracion alguna sobre el hecho que se le imputaba, ni tampoco se le instruyó en regla su sumaria, para que hubiera preparado sus pruebas y defensa, y así hubiera justificado su inocencia. Así pues, este solo hecho que está bastante esclarecido en autos, dá mérito suficiente para que se otorgue el amparo solicitado.

Por esto, el suscrito, cumpliendo con el ministerio que lo está encomendado, pide á V. se sirva determinarlo, con fundamento del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Marzo 4 de 1874.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Mayo 15 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por Ricardo García, con motivo de haber sido condenado á sufrir la pena de tres meses de prision haciendo la limpieza en la cárcel pública, y al pago de cincuenta pesos de multa, por el Tribunal de 1ª instancia del Distrito de Tepeji, en virtud de haber sido acusado de tinterillo; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal;